



Colombia

Superficie : 1.138.910 km2.

Población : 44.222.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Alvaro Uribe Vélez.

Colombia - Informe anual 2005

La situación de la libertad de prensa sigue siendo crítica en el país, incluso a pesar de que en 2004 mataron a menos periodistas que en los años precedentes. Los grupos armados, y también los políticos corruptos y los narcotraficantes continúan imponiendo a los periodistas la ley del silencio.

En Colombia, hasta las buenas noticias tienen un regusto amargo. Sin embargo, con sólo un periodista y un colaborador de los medios de comunicación muertos, 2004 debería ser considerado como un buen año para los defensores de la libertad de prensa en un país donde, de media y según las cifras oficiales, matan a cinco reporteros cada año. Por otra parte, han sido declarados inocentes los dos presuntos asesinos del periodista y humorista Jaime Garzón, que no eran más que chivos expiatorios. Tampoco en esto hay que ser exigente : el retroceso de la impunidad ya está generando un retroceso de la injusticia. Y éstas son las buenas noticias. En lo que se refiere al resto, realmente no ha cambiado nada en este país considerado el más peligroso del continente para la profesión. Por el contrario, se ha vuelto aun más como pone de manifiesto el caso de Oscar Alberto Polanco Herrera, asesinado el 4 de febrero de 2004. Presentador del programa informativo "Notas de dirección" en el canal local de televisión CNC Noticias de Cartago (a 300 kilómetros al oeste de Bogotá), Oscar Alberto Polanco Herrera cuestionó al alcalde de la ciudad, objeto de una investigación por sus presuntas relaciones con un narcotraficante. El caso evidencia las relaciones, cada vez más estrechas y complejas, que mantienen los enemigos de la libertad de prensa -político corruptos, narcotraficantes, grupos armados-, y que hacen que sean aun más arriesgadas las denuncias de sus fechorías.

Una situación en ocasiones alarmante

En algunas provincias, la situación de la libertad de prensa es realmente alarmante. En abril de 2004 Reporteros sin Fronteras, junto con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), llevó a cabo una misión de investigación en Barrancabermeja (a 300 kilómetros al norte de Bogotá). En esa ciudad, la violencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), llegadas a la región en 2000, ha sucedido a la de la guerrilla de las

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas). Así, los paramilitares son sospechosos de matar, en abril de 2003, a José Emeterio Rivas, de la emisora Calor Estéreo, quien había denunciado las relaciones de la municipalidad con algunas empresas que les pertenecían. En 2002, un comandante de las AUC advirtió a los periodistas : "A partir de ahora, velo por la buena imagen de Barrancabermeja. Hay que hablar bien de la ciudad, no habléis de los muertos". La investigación de las cuatro organizaciones evidenció también otros medios de presión más discretos, tales como las amenazas proferidas por algunos oficiales del ejército o la utilización que la alcaldía hace de la publicidad pública, para silenciar las voces críticas.

La información local se encogido así como una piel de zapa. En la ciudad de Líbano (Departamento de Tolima) bastó que Luis Alberto Castaño fuera amenazado y decidiera marcharse de la región para que la ciudad se transformara en un "no new's land". En la radio comunitaria Café 93.5, Luis Alberto Castaño era el presentador del último informativo radiofónico de Líbano. Denunció en antena una oleada de asesinatos, atribuidos a los paramilitares. El periodista pudo marcharse de la zona gracias a un programa de protección creado por el gobierno. Pero, para los defensores de los medios de comunicación, se trata de una victoria pírrica. Una vez que el periodista se ha ido, los enemigos de la información se frotan las manos.

Por tanto, cada vez son más los colombiano que sólo pueden contar con los medios de comunicación nacionales, para informarse. Aunque tampoco éstos quedan al margen de la violencia y las presiones, como pone de manifiesto el caso de Semana. Varios periodistas de ese semanario de Bogotá se enteraron de que les habían intervenidos los teléfonos.

Recibieron amenazas después de que la revista denunciara la infiltración de narcotraficantes en los grupos paramilitares, y de que publicara algunas informaciones delicadas sobre las negociaciones entre el gobierno y los grupos paramilitares. Las demás redacciones no dieron ninguna muestra de solidaridad particular con Semana. La falta de unidad frente a los enemigos es una importante debilidad de la prensa colombiana.

Unas negociaciones que no llegan a nada

Tras el fracaso de las negociaciones entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y la guerrilla de las FARC, el presidente Alvaro Uribe Vélez ha emprendido un proceso de paz con los grupos paramilitares. Algunos hablan ya de fracaso. Las desmovilizaciones anunciadas siguen siendo muy escasas (cerca de 3.400 hombres de un total estimado de 20.000). Y, de los cerca de 900 combatientes desmovilizados en 2003, sólo el 30% eran efectivamente paramilitares ; los demás eran delincuentes reclutados para la ocasión. También planea la duda sobre la identidad de quienes negocian en nombre de los paramilitares. Algunos de ellos serían narcotraficantes, que esperan así beneficiarse de la medida de amnistía que acompaña al proceso de paz. En Colombia, los predadores de la libertad de prensa todavía van a poder disfrutar de buenos días. Se trata de los narcotraficantes y los jefes de los tres principales grupos armados : Manuel Marulanda, líder de las FARC ; Nicolás Rodríguez Bautista, jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) y, tras la misteriosa desaparición de Carlos Castaño en 2004, su sucesor al frente de las AUC, Salvatore Mancuso. No hay que olvidar que estos hombres, o sus tropas, a veces no son más que el brazo armado de políticos corruptos o traficantes de droga, muy preocupados porque se silencien algunas informaciones que les conciernen.

Balance de 2004

- ▀ 1 periodista muerto
- ▀ 1 colaborador de los medios de comunicación muerto
- ▀ 3 periodistas secuestrados
- ▀ 2 periodistas detenidos
- ▀ 28 periodistas agredidos
- ▀ 25 periodistas amenazados

Testimonio

« Mi hija era el primer objetivo »

Claudia Julieta Duque es periodista independiente. Durante varios años ha estado investigando el asesinato del célebre periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999. Sus investigaciones han demostrado que algunos de los servicios del Estado intentaban manipular la investigación judicial. Amenazada varias veces, en diciembre de 2004 se vio obligada, por segunda vez en tres años, a marcharse del país.

En los archivos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, con el que trabajo, hay una carpeta que lleva el título « Caso Claudia Julieta Duque ». En efecto, desde 2001 me han amenazado repetidamente, a causa de la investigación que he efectuado sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto en Bogotá. Gracias al equipo de trabajo puesto en marcha con el colectivo José Alvear Restrepo, conseguimos probar que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio de inteligencia que depende de la autoridad del Presidente de la República) había manipulado la investigación oficial. Esa manipulación, encubierta por la fiscalía general hizo que, durante más de cuatro años, la investigación fuera más lenta.

En marzo de 2004, tras el proceso de los presuntos asesinos del periodista, el tribunal ordenó finalmente la apertura de una investigación sobre los funcionarios del DAS que habían trabajado en el caso Garzón. Pero, en 2001, cuando empecé a recibir amenazas, solo dos personas sospechábamos esa manipulación : Alirio Uribe, el abogado de la familia Garzón y de Reporteros sin Fronteras, y yo misma. El 23 de julio de 2001 me secuestraron en un taxi. Entre esa fecha y la de primer exilio, el 30 de septiembre del mismo año, el único avance fue la detención de un tal « Toño », sospechoso de ser piloto de la moto en que circulaba el asesino.

Durante más de tres meses estuve anotando los números de matrícula de los vehículos que me seguían. Uno de ellos pertenecía al DAS. Otros, unos taxis, llevaban matrículas falsas que en realidad pertenecían a camiones, autobuses o vehículos particulares. Otros más estaban registrados en las direcciones del Palacio Nariño, el palacio del Presidente, la guardia presidencial o el hospital militar. A pesar de todo la fiscalía, que mientras tanto había dado fin a las investigaciones en el caso Garzón, decidió ignorar mis denuncias, llegando incluso a la conclusión de que los vehículos eran « normales ».

Cuando regresé al país, en 2002, retomé las investigaciones y, en agosto de 2003, yo misma participé en la realización de un documental sobre Garzón, para el programa de televisión « Contravía », que más tarde resultó recibió un premio. A partir de entonces me siguieron de nuevo, así que volví a anotar los números de las placas de matrícula, que nuevamente resultaron ser falsas. Recibí llamadas de desconocidos en las que amenazaban con atacar a mi hija, y esto ocurrió hasta el 17 de noviembre de 2004. Ese día, un hombre llamó al número que me había concedido el gobierno, en el marco de su programa de protección de periodistas. Dos días antes, las autoridades me proporcionaron un vehículo blindado advirtiéndome que, una vez que mi seguridad estaba garantizada, mi hija se convertía en el primer objetivo. Por eso opté nuevamente por el exilio tras haber luchado, sin éxito, para conseguir una auténtica investigación. Este es el enorme tributo que hay que pagar por luchar contra la impunidad en Colombia.